
Fragmentación, reflujo y desconcierto

Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010)

FRANKLIN RAMÍREZ GALLEGOS

Profesor e investigador de FLACSO-Ecuador.

Resumen

Para entender la acción colectiva en el Ecuador de la primera década del siglo, es necesario atender a dos actores fundamentales: el movimiento indígena ecuatoriano y el movimiento construido en torno al liderazgo de Rafael Correa. En este artículo se realiza una retrospectiva histórica sobre la génesis e institucionalización del primero en las movilizaciones contra las medidas neoliberales a inicios de los años noventa y se da cuenta de su papel en los acontecimientos que marcaron la primera mitad de la presente década. Asimismo, se explica el surgimiento de la figura de Rafael Correa y su movimiento Alianza País a través del desgaste del movimiento indígena, arrastrado en la crisis definitiva de legitimidad del sistema de partidos surgido en los años setenta. En esta nueva coyuntura se analizan el triunfo de Alianza País en las presidenciales de 2006 así como el proceso constituyente al que dio lugar, sin dejar de lado los roces de Correa con el movimiento indígena y la naturaleza y alcances del posneoliberalismo correísta.

Abstract

To understand collective action in Ecuador in the first decade of the century, it is necessary to regard two central actors –the Ecuadorian indigenous movement and the movement built on Rafael Correa’s leadership. This article reviews the historical aspects of the Ecuadorian indigenous movement, including its inception and institutionalisation in demonstrations against neoliberal measures in the early nineties and notes the role it played during the defining events of the first half of the current decade. Additionally, it elaborates on the emergence of Rafael Correa’s figure and his Alianza País movement as the indigenous movement waned during the acute legitimacy crisis of the party system, which began in the seventies. In this context, the article explores the success of Alianza País in the 2006 presidential elections, as well as the resulting constitutional process that ensued, without excluding the friction between Correa and the indigenous movement and the essence and scope of Correa’s post-neoliberalism.

Palabras clave

Movimiento indígena, asamblea constituyente, acción colectiva, posneoliberalismo, multitud

Keywords

Indigenous movement, constitutional assembly, collective action, post-neoliberalism, multitude

Cómo citar este artículo

Ramírez Gallegos, Franklin 2010 "Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010)" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XI, N° 28, noviembre.

Introducción

El sinuoso desenvolvimiento del campo de los movimientos sociales en el Ecuador del siglo XXI está marcado por dos momentos contradictorios. Por un lado, la incorporación del movimiento indígena ecuatoriano (MIE) en las arenas de la política instituida y su mismo acceso al poder político en 2003 se producen en un momento en que la contundencia de la crisis de legitimidad del sistema de representación, agudizada en 2005, llega al punto de canibalizar a todos los actores que habían orbitado en torno suyo, incluso aquellos que, como el MIE, operaron, desde dentro y desde fuera del sistema, en procura de su transformación radical. La pérdida de la centralidad política que el movimiento indígena conquistara a lo largo de los años noventa y el reflujo de la movilización social aparecerían como correlatos de este momento.

Por otro lado, la estructura de oportunidades abiertas por la misma crisis del sistema político y la ilegitimidad de los partidos permitió la emergencia y consolidación de un liderazgo de vocación transformacional –Rafael Correa es electo presidente a fines de 2006– que, aun si ocupa prácticamente el mismo registro discursivo abierto por el MIE y sus aliados durante los años noventa, no integra a gran parte de dichas dinámicas en el centro del emergente bloque de articulaciones políticas que hoy en día impulsan un proceso de cambio en el país. Entre las coincidencias programáticas con dicho bloque y la relativa subsidiaridad en la conducción del tránsito post-neoliberal –cuestiones visibles en el transcurso de la Asamblea Nacional Constituyente (2007-2008)– las organizaciones sociales han resentido un profundo desconcierto y desacomodo en sus alineamientos, programas y formas de acción colectiva.

Entre uno y otro momento se dibujó un breve interregno de una emergente movilización social (2005-2006) que, sin sólidas estructuras organizativas, tomó la plaza pública en nombre de un discurso que combinaba la utopía de refundar la "República sin partidos" con la más sosegada voluntad de recomponer los fundamentos éticos de la democracia. Menos ruidoso pero más heterogéneo y urbano que en décadas pasadas, este activo segmento de ciudadanos indignados solo creía encontrar en su seno las reservas morales necesarias para transformar la política instituida. Nunca fue suficiente. Las demandas de reforma política de la impaciente *multitud anti-partidaria* quedaron represadas en medio del bloqueo de los partidos para abrir cualquier escenario de cambio que no fuese plenamente controlado desde los propios centros del sistema político. Se ampliaron entonces las opciones para que, en lo inmediato, ganen eco las agendas de cambio político radical.

La emergencia de Correa y la convocatoria a una Asamblea Constituyente (2007) quebraron el dominio de las fuerzas del *establishment*, profundizaron las perspectivas para la despartidización del orden político y abrieron una fase post-neoliberal de organización del Estado y la economía. Al interior de estas coordenadas, las fuerzas progresistas y populares del país pujan –muchas veces entre sí– por fijar los contenidos específicos de los órdenes alternos. La derecha y los sectores neoconservadores, muy disminuidos electoralmente, apenas si han alcanzado a reconducir dicho campo de debate.

La debilidad de las élites tradicionales se prolonga desde mediados de los noventa¹. Tras el aparente consenso “modernizador”, el reordenamiento neoliberal no consiguió desactivar, y más bien estimuló, entre las fracciones dominantes, fuertes disputas por la orientación de las privatizaciones y el control de segmentos estratégicos del mercado. Así, incluso si la derecha controlaba los espacios de representación política –dominó la arena legislativa entre 1990 y 2006– no conseguía consistentes niveles de acuerdo político, entre los estratos y capas a los que representaba, para instaurar formas estables y coherentes de gobierno con la capacidad de irradiar y ser reconocidas por el resto de la sociedad. Dicha atrofia hegemónica (Zavaleta Mercado, 2008) exacerbó la turbulencia política, ralentizó el avance del neoliberalismo y extendió las oportunidades para que diversas organizaciones sociales desafiaron reiteradamente el *statu quo*.

Y es que desde el primer levantamiento indígena de 1990 y, sobre todo, luego de tres revueltas cuyo desenlace fue un derrocamiento presidencial (1997, 2000, 2005), la batalla entre fuerzas consolidadas –los partidos políticos que dominaron la escena democrática desde el retorno en 1979– y actores emergentes –nuevas organizaciones y movimientos políticos y sociales– se colocó como uno de los *diferendos constitutivos* de la democracia ecuatoriana. No se trataba de simples episodios de ingobernabilidad o de la fragilidad institucional de la arquitectura democrática, como una cierta ciencia política conservadora lo ha interpretado, sino de la vigencia de un ciclo de desacato y asedio social a las figuras dominantes del ordenamiento político (Ramírez Gallegos, 2005). Dicho diferendo ha estado en la base de las líneas de cambio político a lo largo de la última década.

Para Pablo Andrade (2005: 61), en efecto, durante este período se produce una “democratización de la democracia” en la medida en que nuevos movimientos y actores sociales ensayan una expansión de la esfera pública desde la cual pasan a disputar a los políticos el monopolio de las funciones de agregación de intereses y de representación mientras –habría que agregar– incrementan su dinamismo en las arenas extraparlamentarias. La movilización indígena y la creación en 1995 del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (PK)² –brazo electoral del MIE– supusieron así el desplazamiento de los partidos tradicionales de las administraciones locales, en zonas de predominio étnico, y abrieron paso a novedosas formas participativas de gestión del poder local.

La tensión entre partidos y nuevos actores sociales colocó, progresivamente, a las propias reglas del juego democrático en el centro de la contienda política: en una década se realizaron, en efecto, dos Asambleas Constituyentes activamente promovidas por movimientos sociales, fuerzas de izquierdas y el conjunto del campo popular. La sucesiva reconfiguración de la comunidad política evidenciaba

los problemas de partidos y élites dominantes para retener el control global de las instituciones políticas. Aun así, una coalición derechista dominó la Convención de 1998. Se consagraron, entonces, constitucionalmente el modelo privatista y la agenda neo-liberal. En medio de una débil representación de las izquierdas, los principales movimientos sociales reivindicaron como sus conquistas la extensión de los derechos sociales, el reconocimiento de los derechos colectivos y la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana.

De la mano de la popularidad del presidente Correa las izquierdas alcanzaron el pleno control de la Convención de 2007-2008. Aun en medio del declive de la movilización social, la nueva Carta Magna constitucionalizó la salida del neoliberalismo, amplió aun más el espectro de los derechos, consagró la plurinacionalidad del Estado, innovó en materia de derechos ambientales, extendió radicalmente los espacios de participación popular y, sobre todo, llevó más lejos que nunca las demandas por la des-partidización del orden político. Descartando la ratificación del presidencialismo –que la izquierda combatió diez años atrás–, el predominio de este conjunto de postulados expresaba que el conflicto social y la lucha política que antecedieron a la Convención consiguieron delinear un horizonte de comprensión común –que no una ideología similar– para vivir en, hablar de y actuar sobre órdenes sociales caracterizados por específicos modos de dominación. Aun en este contexto, las disputas entre el ejecutivo, la Asamblea y los movimientos sociales no fueron menores. La Constituyente consiguió no obstante integrarlas en su seno generando una fluida dinámica de interlocución y reconocimiento político entre las fuerzas progresistas.

Es, precisamente, la lógica del reconocimiento la que habría entrado en crisis en la transición post-constituyente (2009). Por un lado, la sobrecarga del poder legislativo, obligado constitucionalmente a aprobar más de once leyes fundamentales en un año, desincentiva cualquier debate público robusto dentro y fuera de las arenas parlamentarias. Por otro, la sólida implantación del liderazgo presidencial, apuntalado en un carrusel de éxitos electorales, acelera las tendencias gubernativas a subestimar el lugar de la acción colectiva autónoma en el proceso democrático. Los espacios de interpelación política entre las organizaciones sociales y el bloque en el poder tienden, así, a jugar un rol periférico en el tránsito institucional ecuatoriano. Ello ha redundado, más allá de la política redistributiva del régimen, en escenarios de confrontación que fragmentan el campo progresista y abren interrogantes sobre la consistencia del proceso de cambio que lidera Rafael Correa. La emergencia de nuevos terrenos de movilización –la conflictividad ambiental– anuncia, a su vez, el sentido de alguna de las contradicciones centrales de la ruta post-neoliberal.

El presente texto escarba, en suma, en las trayectorias de la acción colectiva democrática a lo largo de la última década a la luz de los factores del proceso político que, en el presente, han determinado un declive de su visibilidad e influencia en la disputa por el cambio y una cierta transformación de sus agendas de lucha.

Tan cerca y tan lejos (2000-2005)

Para inicios del siglo XXI, el movimiento indígena –y, en particular, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)– se había colocado como el eje articulador del conjunto de organizaciones populares y fuerzas de

izquierdas en el país. La tortuosa modernización neoliberal, encaminada en medio de un intenso faccionalismo entre los sectores dominantes, había ampliado la estructura de oportunidad para la consolidación del MIE y para la extensión de su programa político más allá de las reivindicaciones étnicas. Su activismo anti-neoliberal hizo de la agenda india una compleja amalgama de demandas indentitarias, ciudadanas y clasistas. Ello facilitó cierta unidad de acción con viejas y nuevas organizaciones sociales y militantes de izquierdas.

Precisamente, luego de diversos intentos, la creación de la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) en 1995 apareció como el acumulado de diversas formas de lucha que buscaban nuevas vías de coordinación política distantes de la “forma-partido”. Además de la CONAIE, la CMS estaba integrada por la Confederación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (CONFEUNASSC), el sindicato público aglutinado en la Federación de Trabajadores Petroleros del Ecuador (FETRAPEC), movimientos de pobladores urbanos y organizaciones de mujeres y jóvenes. Se trataba del más ambicioso intento de articulación de la nueva corriente de organizaciones sociales. Su dinámica organizativa, más descentrada y compleja, difería de otras instancias de coordinación controladas por la vieja izquierda partidaria: el Frente Popular, que agrupa al profesorado público y a los gremios estudiantiles y universitarios, bajo la tutela del Movimiento Popular Democrático (MPD, línea pro-china); y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que articula a centrales sindicales y ha expresado históricamente a la izquierda socialista y comunista.

El protagonismo político de la CONAIE y de la CMS en la resistencia al ajuste neoliberal afirmó la opción de las organizaciones indígenas para crear su propia estructura de participación política. Las demandas de plurinacionalidad, autodeterminación y territorialidad, tres ejes del Proyecto de la CONAIE (1994), exigían reformas que debían ser procesadas desde dentro del sistema político. El crecimiento y liderazgo del MIE hacían inviable que pudiera continuar delegándose en partidos afines la tarea de avanzar en tales reformas: para 1995 se creó el Pachakutik. No era entonces –como ha planteado Claus Offe en su modelo sobre la institucionalización de los movimientos sociales (1992)– el agotamiento de la estrategia de confrontación lo que impulsó al MIE a transformar su naturaleza organizativa. Al contrario, la lucha extraparlamentaria había hecho del movimiento un actor político exitoso que empezaba a generar adhesiones y a representar intereses que iban más allá de su base original.

La consistencia del MIE y sus aliados se puso a prueba en la Asamblea Constituyente de 1998 convocada luego del derrocamiento presidencial de Abdalá Bucaram (en febrero de 1997). El cónclave enfrentó a dos agendas. Una alianza de derecha –liderada por el Partido Social Cristiano (PSC)– buscaba superar los escollos que contenía la Constitución de 1978 para dar viabilidad a la privatización de las áreas estratégicas, la consolidación de la agenda ortodoxa y la profundización del presidencialismo. A esta perspectiva se opusieron, con una representación minoritaria, el movimiento indígena, la izquierda y prácticamente todas las organizaciones sociales con una propuesta basada en la ampliación de derechos ciudadanos y en la defensa de la acción estatal. La Constitución de 1998 legitimó, finalmente, la agenda neoliberal³ y amplió el campo de los derechos⁴.

Para el MIE, los resultados fueron ambivalentes: si bien la Asamblea no declaró la plurinacionalidad del Estado, sí reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Su participación en la Asamblea reflejaba, en cualquier caso, algo más que la afirmación electoral de PK: el movimiento parecía definitivamente integrado al sistema político. Ello debía, a futuro, incentivar su rol como un actor político interesado en mantener el *statu quo* y en aprovechar las recientes innovaciones institucionales (Andrade, 2005). La “normalización” de la acción colectiva indígena estaría, sin embargo, lejos de llegar.

Coaliciones indígena-militares

El nuevo gobierno demócrata-cristiano (1998-2000) de Jamil Mahuad se sostenía en el mayoritario apoyo legislativo de los dos más importantes partidos de la derecha ecuatoriana, el PSC y la Democracia Popular (DP), a la que pertenecía el presidente. Tales partidos controlaron la Asamblea Constituyente de 1998 y aspiraban a concluir el ciclo de reformas neoliberales y a devolver la estabilidad política al país. Sus expectativas fueron rápidamente frustradas.

El plan económico de Mahuad, avalado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), se centró en enfrentar la fragilidad sistémica del sector financiero y la debilidad fiscal. El Estado se embarcó así en una operación de “salvataje” a las instituciones bancarias que, para fines de 1999, le costaba al país el 24% de su PIB (Romero, 1999). La creación de la Agencia de Garantía de Depósitos, cuyo fin era administrar a los bancos quebrados por el uso indebido de los depósitos, sacó a la luz pública todo un engranaje de gestión bancaria ilegal y la sólida implantación de acuerdos oligárquico-mafiosos en la política económica del país. La desregulación financiera y la complicidad de las autoridades con las élites bancarias degeneraron en la extensión de la crisis a un número cada vez mayor de instituciones. En marzo de 1999, Mahuad decreta un feriado bancario y el congelamiento de los ahorros ciudadanos. Aun así, el Banco Central continuaba en su política de intensa emisión monetaria para proteger al sistema financiero. El gobierno asumía que la paralización de la inversión, el cierre de empresas y el crecimiento del desempleo⁵ podían ser manejados como males menores. Una vez más, como a lo largo del proceso de ajuste, se priorizaba la estabilización financiera por sobre la reactivación productiva. Era la peor crisis económica del país desde su proclamación republicana⁶ (Ramírez Gallegos, 2000).

El país entró en una nueva espiral de conflicto. La CONAIE –liderada por el dirigente amazónico Antonio Vargas– y sus aliados urbanos conseguirían que el gobierno reestablezca el impuesto a la renta –suspendido a inicios del mandato de Mahuad–, imponga un tributo especial a los vehículos de lujo y reconsidere la suspensión de subsidios. Para el PSC se trataba de una excesiva concesión a la izquierda: rompió entonces con el gobierno. El faccionalismo intra-elitario proseguía. Las organizaciones indígenas invocaban, por su parte, la creación de un poder paralelo al del Congreso –los “Parlamentos de los Pueblos”–, la sustitución del poder ejecutivo por un gobierno revolucionario y la designación popular de nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia⁷. Amenazado ‘desde arriba’ y ‘desde abajo’, la decisión de Mahuad de dolarizar la economía emergía más como una suerte de salvavidas político que como resultado de algún tipo de reso-

lución técnica a la crisis: la dolarización rearticuló, en efecto, al empresariado, la banca y al conjunto de la derecha.

Mientras los Parlamentos de los Pueblos se instalaban en diversas provincias, ciertos dirigentes de la CONAIE –sin conocimiento pleno de PK y del resto de organizaciones indígenas– mantenían reuniones con mandos medios del ejército para plantear la disolución de los tres poderes del Estado. En tales conciliábulos incidieron dirigentes urbanos de la CMS muy afines a ideas “putschistas” sobre el cambio político. Los nexos entre el ejército, los movimientos sociales y partidos de izquierda no eran nuevos. Ciertas convergencias anti-privatizadoras⁸ y la presencia militar en programas de desarrollo rural los habían acercado. Coincidían, además, en la defensa de las políticas desarrollistas de los setenta, la condena al sistema de partidos y el rechazo al empobrecimiento generalizado.

Los indígenas llegaron a la capital de la República, Quito, sede de los tres poderes del Estado, la noche del jueves 20 de enero y cercaron el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. La dimensión de la movilización era mucho más reducida que en anteriores ocasiones. Aun así, en la mañana del 21 de enero de 2000 cientos de indígenas ingresaron al Parlamento de la mano del ejército. El derrocamiento presidencial se consumó en horas de la noche. El coronel Lucio Gutiérrez, el presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, y el magistrado guayaquileño Carlos Solórzano, fueron los triunviros de la “Junta de Salvación Cívico Militar” que derrocó a Mahuad. La rebelión terminó en la madrugada del 22 de enero cuando el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desconoció a la Junta y devolvió el poder al vicepresidente Gustavo Noboa en una secuencia de hechos cuyo trasfondo conspirativo aún no ha sido aclarado.

Para la izquierda tradicional, las fracciones “putschistas” de la CMS y ciertos dirigentes indígenas la insubordinación era la única forma de alcanzar el control estatal y el episodio de enero no era, en absoluto, un error estratégico. Otros sectores consideraban, al contrario, que haber ido “más allá” de las instituciones ponía en riesgo el prestigio del movimiento como fuerza democratizadora y restringía su campo de articulaciones. La acción conspirativa y poco consensuada de Vargas y sus aliados explicaba, de hecho, la débil movilización social (Barrera, 2004). Unos y otros, de todos modos, no hablaron nunca de “golpe de Estado” y sí de rebelión popular. Los insubordinados habían conseguido así “reintroducir en el lenguaje político nacional la figura de la revolución como transformación radical del orden político” (Andrade, 2005: 97). Mientras que al interior del movimiento se incrementaban las fricciones, las encuestas revelaban que el 70% de la población estaba de acuerdo con el derrocamiento. En las elecciones locales de mayo del 2000 el apoyo electoral a PK creció. La viabilidad de la estrategia dual del MIE parecía confirmarse (Ramírez Gallegos, 2008).

Del levantamiento indígena a la experiencia gubernativa

Gustavo Noboa ratificó la dolarización. La movida insurreccional apenas desacomodó por unas horas los nexos entre el poder político y el poder económico. En el contexto de la continuidad de la agenda ortodoxa, el nuevo gobierno elevó, en diciembre de 2000, los precios de los transportes públicos, de los combustibles y del gas de uso doméstico. No fue una decisión oportuna: la defensa

del precio del gas era, a esas alturas, todo un símbolo de la resistencia indígena a las políticas de ajuste.

La preparación del nuevo levantamiento permitió bajar las tensiones internas. Para las acciones de enero-febrero de 2001 la CONAIE alcanzó un acuerdo con todos los frentes y organizaciones indígenas y campesinas, mientras se distanciaba de los sectores urbanos concentrados en la CMS. Paradójicamente, el eje de la plataforma de lucha era marcadamente clasista y buscaba el respaldo, bajo el lema “nada solo para los indios”, de los sectores de medianos y bajos recursos económicos, independientemente de su adscripción étnica⁹. La movilización había sido preparada –a diferencia de aquella de enero de 2000– junto con las comunidades, organizaciones locales y autoridades indígenas electas. Ello explicaba su capacidad para reactivar la red organizativa del MIE en todo el territorio (Chiriboga, 2001). La fuerte represión gubernamental incrementó el malestar indígena y generó una importante adhesión ciudadana con los movilizados. El peso de la opinión pública y el mismo incremento de la violencia forzaron al gobierno y al MIE a acordar una agenda que reducía el aumento del precio del gas y reabría la discusión sobre otras medidas económicas impopulares (Barrera, 2001).

De cara a las elecciones generales de 2002 el MIE había recuperado parte de su capital político. Las fricciones internas, sin embargo, no parecían cesar. En el seno de la CONAIE, las tendencias más “indigenistas” y “pragmáticas” ganaron en protagonismo. La plena implicación de dirigentes e intelectuales indígenas en la gestión de cuantiosos proyectos de desarrollo financiados por el Banco Mundial, a cuenta de la deuda externa del Estado, facilitó la consolidación de dichas tendencias¹⁰. El II Congreso de PK (en septiembre de 2001), mientras tanto, expulsó a altos representantes de la CMS. La incidencia de la Coordinadora dentro del movimiento político disminuiría, en adelante, de modo considerable. Dirigentes históricos de las organizaciones indígenas y mestizos de izquierdas –ligados a los procesos de lucha por la legalización de asentamientos urbanos y la vivienda popular– quedaron al frente de PK. Sus diferencias con la nueva dirigencia de la CONAIE elevarían, en el futuro inmediato, el nivel de turbulencia a la hora de las decisiones electorales.

La postulación unilateral del ex presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, como candidato presidencial –bajo el apoyo de las organizaciones amazónicas y de la Federación de Indios Evangélicos (FEINE)– evidenciaba la fragilidad articuladora de la CONAIE y la dejaba en una difícil situación para las definiciones electorales. El planteamiento de Vargas y la creación de Amauta Jatari –brazo electoral de los evangélicos– parecían materializar la vieja aspiración amazónica de crear un partido exclusivamente indio. Una parte importante de los indígenas se distanciaba así de las corrientes más clasistas del movimiento.

Para evitar una mayor fragmentación, la CONAIE se abstuvo de postular un candidato indígena en las presidenciales de 2002. Dicha decisión llegó luego de que PK había resuelto sostener la candidatura de Auki Tituaña (alcalde indígena que ganó prestigio al promover la democracia participativa local). PK buscó entonces la formación de un polo electoral con fuerzas afines. Con un marco de alternativas limitadas, luego de frustradas conversaciones con socialdemócratas y socialistas, el movimiento llegó a un acuerdo con Lucio Gutiérrez (Partido Sociedad Patriótica, PSP), el coronel que lideró el derrocamiento de Mahuad. La coali-

ción indígena-militar incluía al MPD y adquiriría así un perfil izquierdista. Gutiérrez había sido invitado al Foro Social Mundial de Porto Alegre y era comparado con el liderazgo de Hugo Chávez en Venezuela. Fidel Castro asistió a su posesión presidencial. Para PK se trataba, sin embargo, de una victoria inesperada: el comité ejecutivo de aquel entonces ha reconocido que con la alianza se buscaba, sobre todo, fortalecer la presencia del movimiento a nivel legislativo (Barrera, 2004). La emergencia de un *outsider*, de rasgos cholo-mestizos, que se pronunciaba contra la clase política, los catapultó, no obstante, al ejercicio del poder. No se había leído adecuadamente el desgaste de los partidos dominantes y la imposibilidad de las élites de conciliar un programa político creíble y de proyección nacional.

Tales sectores veían con asombro y rechazo cómo indios, militares nacionalistas y militantes de izquierda llegaban al poder. En el resto del campo progresista –aun cuando se veía con reservas la alianza con ex militares– se avizoraba, al menos, un cierto recambio en el modelo económico. Las expectativas se derrumbaron rápidamente. Gutiérrez formó un gabinete que dejaba en un rol secundario a PK: optó más bien por personajes cercanos a su círculo militar y a sectores bancarios y productivos en los ministerios claves. Solo Nina Pacari y Luis Macas –dirigentes históricos del MIE– fueron designados, respectivamente, como Canciller y Ministro de Agricultura. Por otro lado, las decisiones económicas, acordadas con el FMI, continuaron con la política fiscal ortodoxa. Gutiérrez optó, además, por alinear al país con los Estados Unidos en su política antinarcóticos derivada del Plan Colombia. En cuanto al estilo de su gestión, el nuevo gobierno asumió rápidamente rasgos patrimonialistas, autoritarios y clientelares. Las denuncias de corrupción y nepotismo crecían rápidamente.

Las críticas a las decisiones presidenciales de parte de los funcionarios gubernamentales de PK aumentaban cada día. Tal tensión carecía de instancias políticas de procesamiento. Los límites del presidencialismo para soportar gobiernos de coalición se hacían más latentes a medida que Gutiérrez se encerraba en su círculo íntimo. Por lo demás, mientras ciertas organizaciones amazónicas y evangélicas, e incluso algunas filiales de la CONAIE, se alineaban con el régimen, otros sectores más doctrinarios e izquierdistas pedían una ruptura inmediata de la coalición. Dichas divergencias obligaron a un largo proceso de deliberación interna que el presidente utilizó para reforzar su política de penetración en las comunidades indígenas. Varios dirigentes –Antonio Vargas entre los más destacados– ocuparon puestos clave en órganos estatales. Se creó, además, una federación india encargada de organizar las visitas de Gutiérrez y ‘sus’ ministros a las distintas comunidades. Las organizaciones indígenas apenas si pusieron límites a la hora de entrar en nexos clientelares con el régimen. La capacidad de movilización del movimiento había sido neutralizada. *La estrategia dual entraba en crisis*. Los vínculos entre el PSP y dirigentes indígenas aún pueden advertirse hasta el día de hoy.

Mientras, la decisión del MPD de romper con el gobierno dejaba a la alianza al filo del abismo. El episodio final llegó cuando el Parlamento rechazó, con los votos de PK, un proyecto de ley acordado con el FMI¹¹. El presidente destituyó entonces a los funcionarios de PK. Inmediatamente la CONAIE desconoció a Gutiérrez y Pachakutik puso fin a su presencia gubernamental. La alianza había durado apenas siete meses. Aunque la decisión presidencial de forzar el rompimiento de la coali-

ción permitió una salida relativamente cohesionada del movimiento, las relaciones internas quedaron en extremo fracturadas: se ahondaron las tensiones entre la CONAIE y PK, entre indígenas y mestizos y entre organizaciones serranas y amazónicas. La lectura oficial responsabilizaba a los miembros blanco-mestizos de PK de la ruptura con el gobierno y colocaba a los indígenas como sus víctimas. Aunque el discurso presidencial abrigaba una óptica racista y proseguía en sus intenciones de fragmentar al movimiento, evidenciaba los problemas internos que aquel había enfrentado a lo largo, y aun antes, de la coalición (Ramírez Gallegos, 2003).

Crisis política y descomposición organizativa

Desde su creación, en PK han convivido presiones ‘institucionalizantes’ y pulsiones ‘movimientistas’ que no han resuelto su ambigüedad constitutiva. ¿Es un movimiento de izquierda plurinacional de nuevo tipo o un simple brazo político del movimiento social? En los días de gobierno, esta indiferenciación institucional restringió el margen de maniobra de PK en su trabajo de articulación política y de acción parlamentaria –toda vez que debía pasar siempre por los filtros del movimiento social–, facilitó la penetración gubernamental de unas bases sociales que no se encontraban, para ese entonces, fácilmente disponibles para la movilización social y, en suma, aceleró el desgaste del conjunto del movimiento en medio de una crisis política que pulverizó la legitimidad de todos los actores políticos.

El frustrado paso por el gobierno modificó, en efecto, la percepción ciudadana sobre el MIE. Los indígenas pasaron a ser vistos como responsables del ascenso de un gobierno que no solo reiteró las tradicionales formas de acción política sino que frustró las expectativas de desmontar al neoliberalismo. La alianza con Gutiérrez lucía, para buena parte de la izquierda, como una decisión aventurada que había sobrestimado las capacidades políticas y organizativas del movimiento. Hacia el interior del MIE, mientras tanto, ganaba terreno el discurso “etno-radical”: los problemas del movimiento se originaban en el abandono de su agenda étnica y del proyecto de construcción del estado plurinacional. El protagonismo del brazo electoral, se insistía, había desviado los objetivos del movimiento social (Dávalos, 2004). Las tesis ‘movimientistas’ e ‘indigenistas’ salían a la luz desde las mismas estructuras de decisión política del movimiento y reforzaban el conflicto entre indígenas y mestizos. El argumento sobre la autenticidad étnica empezó a jugar más que nunca como una espada de Damocles sobre las opciones más pluralistas del movimiento. El “cierre étnico” tomó forma en la configuración de los nuevos cuerpos representativos de la CONAIE y de PK. La principal organización indígena designó nuevamente a Luis Macas como su coordinador. Su programa enfatizaba en la necesidad de retomar el proyecto de las autonomías territoriales y de volver al trabajo en las comunidades. La CONAIE afirmaba, además, su interés de recuperar el control de PK. El Comité Ejecutivo que había coordinado al movimiento durante su paso por el gobierno, comandado por mestizos de izquierda, fue relegado a un segundo plano.

Mientras tanto, y ya desde la oposición, el bloque legislativo de PK estableció un acuerdo con los dos más grandes partidos del país, el PSC y la Izquierda Democrática (ID, socialdemócratas), en un intento por enjuiciar al presidente por uso indebido de fondos públicos. Su acercamiento a tales partidos, considerados los “dueños del poder”, profundizaba el desprestigio de PK. La contraofensiva de

Gutiérrez supuso captar la mayoría legislativa –en parte a través de la compra de diputados– para tomar el control de la Corte Suprema de Justicia. Una verdadera “guerra sucia partidaria” se desarrolló desde entonces en el poder legislativo en procura de estabilizar o recomponer la correlación de fuerzas que había permitido el descalabro de la Justicia y la búsqueda de control de otras instituciones públicas. Amenazas, sobornos, difamación y golpes bajos resquebrajan las mínimas garantías para el ejercicio de la soberanía popular. Nunca antes el *modus operandi* del conjunto de la clase política había quedado tan expuesto a la luz pública. En ese escenario, una nueva movilización social volvía a irrumpir en la escena política para contestar no solo la intervención presidencial en la justicia sino la legitimidad del conjunto de los poderes constituidos.

Durante los diez días de protesta social que antecedieron al derrocamiento de Gutiérrez, en abril de 2005, el MIE *no estuvo en la calle*. Bajo la consigna “que se vayan todos” –escuchada también en las movilizaciones argentinas de 2001– miles de ciudadanos bailaron, cantaron, hicieron sonar sus cacerolas y formaron asambleas como inéditos repertorios contenciosos. A diferencia tanto de la destitución de Bucaram en 1997, cuando las movilizaciones fueron encabezadas por los partidos y movimientos sociales –sobre todo la CONAIE–, como del derrocamiento de Mahuad, cuando los indígenas se enlazaron con mandos medios del ejército, las jornadas de abril de 2005 fueron resultado del *desborde ciudadano* a la tutela partidista y al comando de cualquier estructura organizativa. El tercer derrocamiento presidencial fue, así, fruto de un conjunto de demostraciones sin ninguna dirección política pre-estructurada. Jóvenes y amplios segmentos de las clases medias urbanas componían el núcleo central de la revuelta. Era la primera vez, desde el levantamiento indígena de 1990, que la movilización social no giraba en torno a, o no estaba liderada por, el MIE. Su lugar fue ocupado por una pluralidad de inexpertos marchantes y de neófitas iniciativas colectivas: un radical anti-partidismo acercaba a oleadas de heterogéneos manifestantes que, sin densas redes organizativas previas, lograron altos niveles de coordinación *mientras se movilizaban*¹².

La malograda experiencia de PK en el ejercicio del poder y la nula participación del MIE en las acciones que propiciaron la caída de Gutiérrez señalaban el *fin de un ciclo* de alto protagonismo político e intensa movilización indígena. El descentramiento de la hegemonía indígena en el campo progresista ecuatoriano parecía haber llegado. Sin su impulso, el conjunto de la conflictividad social entraba en declive (ver Gráfico 1). No estaban en juego la descomposición del movimiento –la CONAIE promovió una contundente movilización contra la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) en marzo de 2006– o la pérdida de vigencia de su agenda política, sino simplemente que sus prácticas políticas y su discurso no alcanzaban ya a interpelar a una multiplicidad de nuevos actores disidentes u opositores al orden vigente. En medio de su pérdida de prestigio social, tampoco parecía ya ser de su interés procurar la articulación con tales nuevos desafíos ciudadanos al sistema político.

En diciembre del 2005 se proclamó la definitiva salida de PK de un importante grupo de dirigentes urbanos y organizaciones sociales que se contaban entre sus fundadores. Tales sectores defendían la tesis sobre la diferenciación institucional

entre el movimiento social y la dinámica político-electoral, y sobre todo la necesidad de una amplia política de alianzas. Sin su contingente, PK perdía una base organizativa urbana de larga experiencia militante. Se reducían así las opciones de sostener los nexos entre lo clasista y lo étnico al interior del movimiento. Quedaba muy poco ya del impulso articulador que inspiró la emergencia de la Coordinadora de Movimientos Sociales.

“...PK perdía una base organizativa urbana de larga experiencia militante. Se reducían así las opciones de sostener los nexos entre lo clasista y lo étnico al interior del movimiento”

Las tendencias hacia la fragmentación y el repliegue étnico de las organizaciones indígenas, hacia un progresivo distanciamiento entre estas y las menos consistentes dinámicas asociativas de los sectores urbanos y hacia la pérdida de credibilidad e influencia del conjunto de las organizaciones sociales que habían reconfigurado el espacio público democrático y desafiado el poder de las élites desde los años noventa se colocaban, en suma, como el complejo balance de su plena inmersión en las arenas de una política instituida en plena descomposición y crisis de legitimidad.

El breve interregno de la multitud (2005-2006)

La protesta social de abril del 2005 no cesó con la caída de Gutiérrez. Los alrededores de la Casa de Gobierno tampoco concentraron todas las demostraciones. El tiempo y el espacio de la revuelta plasmaron notables diferencias con respecto a los dos anteriores derrocamientos: había ya, y muy probablemente gracias a estos últimos, una comprensión más sofisticada sobre la mecánica del poder. Las sedes del Parlamento Nacional, de la representación diplomática de los países (Brasil, Estados Unidos) y organizaciones (OEA) concernidas en el desenlace de la crisis, las viviendas particulares de diversos políticos, entre otros lugares, vieron repetirse las protestas iniciadas con anterioridad. Las asambleas, que coordinaron en diversos puntos las acciones de protesta, prosiguieron también con sus dinámicas deliberativas luego de la caída del régimen. Otras se constituyeron en las semanas sucesivas. Hombres y mujeres, que se inauguraron a la vida pública en esos días, continuaron movilizados. Así, aun cuando se trataba de iniciativas moleculares, localizadas sobre todo en la ciudad de Quito y, dentro de ella, en ciertos estratos y espacios sociales, no se produjo –como en anteriores derrocamientos– un inmediato repliegue de la ciudadanía movilizada a la normalidad de lo privado.

Algunos han interpretado tal dinámica como expresión de la actividad de un movimiento social: el “movimiento de abril” o el “movimiento forajido”¹³. Tales tesis sobrestiman la convergencia *en la calle* de ciudadanos y organizaciones con heterogéneas procedencias y filiaciones políticas e ideológicas, y tienden a dotarlos de un horizonte político común. Desde un inicio de las acciones contenciosas, por el contrario, las razones, intereses y proyecciones de los manifestantes fueron

por vías disímiles y divergentes¹⁴. La identidad colectiva que, en el curso de la protesta, supo otorgar el mismo ex presidente a la multitud indignada cuando la bautizó como “forajida” fue disolviéndose y contestándose mientras emergía a la luz, precisamente, la diversidad –y las mismas contradicciones– de individuos, organizaciones, intereses y discursos que habían nutrido a la revuelta. Más que de una identidad, entonces, cabría hablar de un provisorio mecanismo de identificación colectiva útil para los fines tácticos de los manifestantes en los días de la cólera, para utilizar una expresión cara a Pérez Ledesma (1994). Nada más que eso.

Por lo demás, pasados algunos meses de la destitución presidencial, el espacio político quedó aun más marcado por la fragmentaria presencia de una serie de dinámicas asociativas y de iniciativas individuales que muy difícilmente encontraron formas de coordinación política convergentes. Los ya para entonces clásicos movimientos sociales –indígenas, mujeres– seguían cabizbajos y solo algunos de sus fragmentos trataban de orbitar en torno de la improvisada dinámica de movilización posterior a abril. Tal debilitamiento abría la ocasión, no obstante, para el surgimiento y la visibilización de nuevas dinámicas de movilización colectiva que, entre otros giros, hablaban de una cierta ampliación y/o desplazamiento de lo rural a lo urbano en términos de los actores y prácticas que, desde la sociedad civil, desafiaban la vigencia del orden político imperante.

Aunque de controvertido estatus sociológico, la noción de *multitud* recoge la amplitud de los fenómenos contemporáneos de exclusión e incertidumbre estructural en que incuban una diversidad de movimientos populares o algo así como una irreductible multiplicidad de expresiones políticas de carácter, a la vez, subjetivo y colectivo. Dichas expresiones procuran hacer valer la singularidad de sus intereses mientras producen nuevas formas de acción política más bien alejadas de la necesidad de construir articulaciones o una base común de acumulación política. Si bien la agregación espontánea de una pluralidad de acciones dispersas no supone la constitución de un campo de mediaciones políticas que soporten consistentes dinámicas de acción colectiva, la disponibilidad de la multitud para desenvolverse en escenarios contingentes amplía el espacio de lo posible (Bensaid, 2005). Sugerimos que tal imagen se corresponde de modo más adecuado con la evolución de una diversidad de dinámicas de movilización ciudadana y participación colectiva emergidas, en los “subsuelos de la política”¹⁵, en el marco de la profunda crisis de legitimidad de las instituciones democráticas del Ecuador a mediados de la primera década del nuevo siglo.

Aun en medio de las heterogéneas trayectorias y de las singulares formas de acción política de la multitud, sus marcos de significación devenían de un profundo malestar con la estructura de representación, con la voluntad de una recomposición ética de la política y con la demanda por una reforma política inmediata. Las perspectivas más radicales apuntaban a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Entre 2005 y 2006 las trayectorias de la movilización estuvieron entonces atadas a un escenario en que las presiones y resistencias a la reforma política enfrentaban, otra vez, a la sociedad civil contra los partidos. Solo pequeños fragmentos organizativos apuntaban a consolidar específicos espacios autónomos de actividad política. Cuatro segmentos más o menos diferenciados pueden distinguirse, en cualquier caso, al interior de la heteróclita multitud que forjó abril.

Una primera constelación emergió en los mismos días de la revuelta con el objeto de coordinar acciones contestatarias e iniciar procesos de reflexión colectiva. La figura de las *asambleas* predominó como instancia de convocatoria y organización inicial. La idea de un espacio de participación y debate abierto, voluntario y horizontal, así como la ausencia de formas centralizadas de coordinación, aparecía entonces como la forma más adecuada para responder al desafío a la representación política. Universidades, estudiantes, barrios, redes de sociabilidad, colectivos, etc., activaron tales espacios de deliberación política. Muchas de estas asambleas no funcionaron más allá de unas cuantas semanas. Otras, sobre todo de carácter barrial, abrieron desde entonces una sostenida actividad organizativa en que concurrieron viejos y nuevos militantes cercanos a pequeños grupos de izquierda y al campo de los movimientos sociales. Su agenda rebasaba las preocupaciones sobre el sistema político. Se situaba más bien en la búsqueda de nuevas formas de acción colectiva y democracia directa en el marco de la afirmación de un sentido autónomo y radical de la política¹⁶. La ocupación de específicos territorios urbanos abrió una novedosa dinámica de politización del espacio público en que se problematizaban los problemas locales a la luz de las tensiones nacionales. Algunas de entre ellas, pocas, funcionan hasta la actualidad.

Un segundo tramo de la multitud alude a las iniciativas organizativas que vieron en abril la oportunidad de recomponer impulsos colectivos frustrados en los meses previos a la caída de Gutiérrez. Y es que desde fines del 2004, y bajo el paraguas de la Alcaldía de Quito, se constituyó la denominada “Asamblea de Quito” que trató de coordinar y liderar el proceso de contestación al gobierno. Su escasa voluntad para emprender acciones directas y su mismo origen “oficial-partidario” limitaron su potencial de articulación y propiciaron el desborde de la movilización por fuera de sus contornos. Pasados los días de mayor agitación, reemergieron o se constituyeron diversas asambleas y colectivos con eminente voluntad de incidir en el proceso de reforma política y, más aun, de proyectarse rápidamente hacia la política instituida¹⁷. En tales espacios convergieron, sobre todo, algunas figuras políticas, sectores medios, profesionales y estudiantes con cierta experiencia militante e imaginarios políticos más o menos radicales. En su discurso se advertía un interés en representar lo que a sus ojos se colocaba como la “agenda de abril”. Su persistencia en el tiempo tuvo distinta suerte. El bloqueo final de la reforma desincentivó la continuidad de algunas dinámicas asamblearias. Otras prosiguieron y algunas de sus figuras más visibles se proyectaron dentro de nuevas coaliciones electorales formadas de cara a las elecciones generales de 2006. Las menos siguieron de cerca el errático proceso de reforma y, en lo posterior, continuaron monitoreando desde el terreno de la sociedad civil la evolución de la dinámica política. Así por ejemplo, la Asamblea de Mujeres de Quito conformó una veeduría social para hacer el seguimiento de un dispositivo participativo –el Sistema de Concertación Ciudadana (SCC)– que el nuevo gobierno debió diseñar para procesar las propuestas ciudadanas desde las cuales debieron establecerse las preguntas de una Consulta Popular que orientaría la reforma política. A dicha convocatoria se había comprometido, en su accidentada posesión¹⁸, el nuevo presidente, Alfredo Palacio¹⁹. Esta y otras instancias de este segmento participativo tomaron también la calle en varias ocasiones en el curso del bloqueado proceso de reforma política.

Un tercer segmento provenía de una constelación de redes ciudadanas y figuras que, mucho antes de la caída de Gutiérrez, habían manifestado su malestar con la descomposición del orden democrático. En los últimos años, de hecho, habían encaminado iniciativas públicas de defensa del Estado de derecho a través de la puesta en marcha de mecanismos sociales de vigilancia de las instituciones políticas y de observación de los actos de gobierno y la agenda pública. En los días previos a la caída presidencial efectuaron diversas demostraciones públicas, nunca masivas, con alto contenido simbólico –como leer la Constitución de la República en las calles– y potencial de posicionamiento mediático. En otro lugar denominé a esta corriente participativa como “alta sociedad civil” para hacer referencia a un conjunto de actores sociales que incluyen nuevos movimientos políticos, pequeños colectivos, diversas Organizaciones no Gubernamentales –conectadas con la cooperación internacional y fundaciones políticas transnacionales– concernidas con temas de control institucional, rendición de cuentas y afirmación de la cultura democrática²⁰. Entre sus particularidades destacan las frágiles conexiones que mantienen con organizaciones populares y movimientos sociales, y la centralidad de liderazgos provenientes de círculos académicos y redes profesionales de élite que les dotan de un alto capital simbólico-cultural y los sitúan como parte de los estratos medio-altos de la sociedad. Dicho posicionamiento explicaría la atención privilegiada que les otorgaron los principales medios de comunicación así como su ingreso ‘por lo alto’ a la escena política. Articulando un discurso liberal de defensa de la institucionalidad democrática, gran parte de sus acciones políticas apuntaron a la denuncia, ante la opinión pública y los organismos pertinentes a nivel nacional e internacional, de la inconstitucionalidad de los actos de la clase política (Ramírez Gallegos, 2005: 38-39).

Ruptura-25, un movimiento político constituido por jóvenes universitarios y profesionales movilizados en torno a un trabajo de formación cívica en temas ligados a la cuestión democrática apareció, en esta coyuntura, como uno de los nuevos actores políticos más dinámicos de este segmento de la multitud. Amparados, desde sus orígenes, en un discurso de rechazo frontal a la política partidaria y a la evolución democrática de los últimos 25 años (1979-2004), dicho movimiento concitó una alta atención pública en el marco de las movilizaciones de abril y, en lo posterior, entró en articulación con algunas de las asambleas antes descritas. Su proyección política fue en ascenso en los años siguientes. La izquierda tradicional y la gran mayoría de las organizaciones populares han tendido a desconocer los puntos de confluencia con la acción crítica de este movimiento.

Por último se sitúa un más incógnito e incierto grupo de ciudadanos sin filiación asociativa ni pertenencia política que, luego de ocupar las calles en abril, exploraron diversos espacios y rutas para su implicación política: participaron en foros de debate político y en algunas asambleas, escribieron cartas a los periódicos, prosiguieron con sus llamadas a la radio en las que se identificaban como “forajidos” y buscaron nuevamente las calles en reacción a distintas decisiones del nuevo gobierno. Uno de los indicios de su participación pública puede ser encontrado en las más de 52 mil propuestas de reforma política –solo el 5% de las cuales fue emitida por actores colectivos– enviadas al Sistema de Concertación Ciudadana (SCC)²¹. La noción –de matriz republicana– de una “ciudadanía

activa”, que afirmaba en todo momento su particular indignación moral ante el devenir de la política nacional, puede describir adecuadamente a este segmento de la multitud.

Con la creación del SCC, el gobierno puso en funcionamiento un mecanismo institucional para conectar la participación social con el nivel de la decisión política –las propuestas ciudadanas serían la base de las preguntas de la Consulta Popular– y preservar así los márgenes de legitimidad necesarios para acometer la reforma. Aunque el dispositivo avanzó, no sin contradicciones, hasta el cumplimiento final de sus objetivos, los desacuerdos partidarios, así como la debilidad política del presidente, impidieron que la voz ciudadana pesara efectivamente en el desenlace del proceso.

En efecto, la ruptura de la socialdemocracia (ID) con el poder ejecutivo supuso el aislamiento de este con respecto a las fuerzas representadas en el poder legislativo. Sin una mínima coalición política en que sostenerse, el presidente reactivó el “espíritu de abril”: convocó a organizaciones y asambleas a apoyarlo en su cruzada por la reforma. El presidente buscó además la convocatoria a una consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre la instalación de una Asamblea Constituyente. Muchas asambleas reactivaron entonces sus encuentros, forjaron documentos de reforma y organizaron foros de discusión. El debate público reverberaba. Los partidos, mientras tanto, procuraban concertar un paquete de reformas a ser procesadas por el mismo Congreso. Utilizando su control del órgano electoral bloquearon, finalmente, la consulta. Era un episodio más en una larga cadena de frustración social con la política instituida.

El zigzagueante trayecto del frustrado proceso de reforma política dejaba, en cualquier caso, señales precisas sobre el ‘nuevo pulso’ entre partidos y ciudadanos. Por un lado, se hacía evidente la impenetrabilidad de los partidos y del sistema político para viabilizar transformaciones institucionales que den cabida a las diversas formas de participación popular. Por otro lado se constataba que, aun a pesar de la ilegitimidad partidaria y de la persistencia de una novedosa movilización social, la molecularidad de la acción política de la multitud y su débil predisposición articuladora impedían la acumulación de la fuerza necesaria para ganar en influencia en la puja por abrir un escenario democrático de cambio. El silencio del MIE y su virtual desconexión con las constelaciones anti-partidarias restaron además potencia organizativa al breve interregno de la multitud. Las ruidosas protestas contra el Tratado de Libre Comercio (TLC), de marzo de 2006, recordaban al país que sin la movilización indígena –aun si fatigada– se reducía la resonancia de las demandas sociales en el espacio político. El rechazo al aperturismo comercial volvía a juntar, en cualquier caso, a los diversos fragmentos rurales y urbanos del campo popular. Las banderas anti-neoliberales articulaban otra vez, con relativa facilidad, a la izquierda social y política ecuatoriana.

El desacomodo del campo organizativo (2007-2010)²²

Marzo de 2010: la prensa publica detalles de reuniones entre la Junta Cívica de Guayaquil y dirigentes de la CONAIE. Los encuentros tenían como objetivo apun-

calar la oposición al gobierno de Rafael Correa. Según la junta, los dirigentes indígenas les habrían solicitado apoyo financiero para emprender acciones contra el gobierno de la *Revolución Ciudadana*²³. Pocos daban fe de la verosimilitud de la noticia: la radicalísima CONAIE sentada junto a quienes tradicionalmente han representado lo más conservador de la oligarquía. Diversas organizaciones populares, partidos de izquierdas e intelectuales críticos condenaron la maniobra. El gobierno rechazó, igualmente, tan bizarro acercamiento.

“El rechazo al aperturismo comercial volvía a juntar, en cualquier caso, a los diversos fragmentos rurales y urbanos del campo popular.”

El malestar al interior del propio movimiento fue también inocultable. Luis Macas censuró de modo tajante los hechos: “no tenemos nada en común con ellos (con la Junta) [...] no podemos sentarnos a conversar y si nos encontramos en la esquina hay que correr hacia el otro lado...” (*El Comercio*, 2010). Mientras, un editorial publicado en uno de los diarios quiteños enfrentados al gobierno encontraba en tales declaraciones un profundo sectarismo político. “Si lo hubiera pronunciado un mestizo, si lo hubiera dicho un dirigente empresarial, refiriéndose al movimiento indígena, habría merecido el repudio general por racista e insensato” (*Hoy*, 2010). El texto iba más lejos y sostenía que, al contrario del sentido común político, entre Guayaquil y la CONAIE existe un punto nodal de convergencia: la demanda por la autonomía y el derecho al auto-gobierno. Aunque la dirigencia indígena desconoció la validez de la reunión, anunció sanciones para quienes propiciaron los encuentros y dispuso la realización de una “limpia” (purificación ritual) de las oficinas de su sede donde habían permanecido los cívicos guayaquileños, no pudo revertir la percepción de que había confundido las cartas de navegación que la han ubicado, desde siempre, en las antípodas del poder establecido.

El episodio habla del complejo proceso de reconfiguración de la conflictividad sociopolítica abierto con el acceso de Correa al poder en 2007. Entre otra de sus características, dicha reconfiguración está atravesada por las tensas relaciones entre el presidente e importantes dinámicas de acción colectiva de la sociedad ecuatoriana. Tales tensiones se han incrementado luego de un período en que, alrededor de la Asamblea Constituyente (2007-2008), el proyecto político de Alianza País (AP)²⁴ generó algo más que “simpatía difusa” en el arco progresista. Múltiples organizaciones sociales y políticas operaron activamente, desde entonces, en el sostenimiento del proyecto de cambio. Algunos de sus militantes llegaron incluso a ser postulados como parte de las listas del oficialismo en las elecciones de 2008 y 2009. Ya antes, fragmentos de la multitud anti-partidista habían ingresado a la plataforma electoral que catapultó a Correa al gobierno.

No es raro escuchar, por ello, en boca de múltiples activistas que la Revolución Ciudadana se ha apropiado de su programa –“nos roban la agenda”– y que la participación electoral de algunos de sus “compañeros” ha repercutido en el funcionamiento habitual de las dinámicas asociativas. Y es que la emergencia de

Correa no solo aceleró el ocaso de los partidos que dominaron la escena política desde 1979, sino que *desacomodó* las líneas de articulación y los programas de acción de múltiples actores sociales.

Si un claro agotamiento de la movilización social antecedió al surgimiento de AP, el sólido posicionamiento del liderazgo presidencial y su escasa predisposición al reconocimiento de las dinámicas de acción colectiva autónoma han contribuido a un estrechamiento de sus márgenes de acción y a la intensificación del conflicto con el gobierno. En dicho escenario influirían, además, algunas diferencias programáticas en el procesamiento de la transición post-constitucional y, de modo menos visible, la desconfiguración de las redes sociales ligadas a los movimientos. La implicación de segmentos de las clases medias radicales –activas partícipes del campo organizativo que se opuso al neoliberalismo y al dominio partidario– en el nuevo bloque gobernante habría generado un cierto vaciamiento de los acumulados organizativos en las arenas estatales.

Las sinuosas relaciones entre el nuevo gobierno ecuatoriano y diversas organizaciones sociales pueden ser mejor observadas si se las ubica en el marco de tres específicos momentos del proceso de cambio político que vive el Ecuador: el surgimiento de AP, el proceso constituyente y la transición legal.

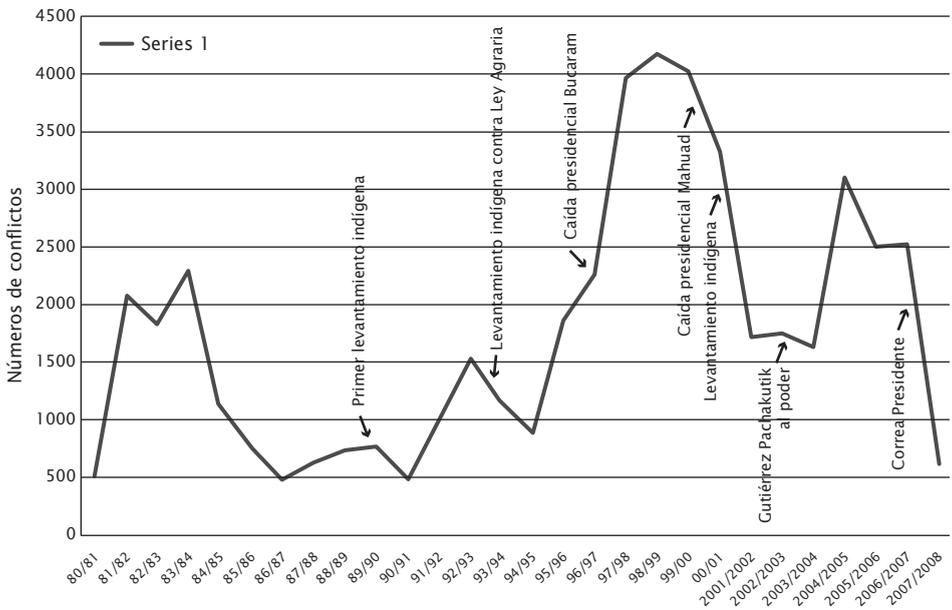
Desencuentros de origen

Desde la campaña electoral de fines del 2006, Correa y su recién nacido movimiento político –Alianza País– tomaron las banderas anti-partidarias heredadas de abril. Sus propuestas (y luego, decisiones) de convocar a una Asamblea Constituyente, descartar la firma del TLC, demandar el fin del acuerdo para la concesión de la Base de Manta a los militares estadounidenses, revertir la primacía del neoliberalismo y privilegiar el gasto social al pago de la deuda externa, entre otras, ocuparon prácticamente el mismo campo discursivo que el levantado por el MIE, otras organizaciones populares y pequeñas fuerzas de izquierdas durante las últimas décadas. La emergencia de Correa se colocaba, sin embargo, en medio de un reacomodo del campo progresista: entre el ascenso de nuevos liderazgos, fuerzas sociales y organizaciones ciudadanas –de escasa trayectoria militante– y, como se ha visto, el declive del movimiento indígena en torno de cuya acción se re-articuló la izquierda ecuatoriana en los noventa. Los resultados electorales del 2006 recogían de algún modo dichas tendencias. La candidatura presidencial de Luis Macas (Pachakutik) apenas alcanzó el 2,19% de los sufragios, el peor resultado obtenido desde el inicio de la participación electoral del movimiento. El candidato del MPD llegaba tan solo al 1,3% de la votación. Correa pasó a disputar el *ballotage* con el 23% de los votos.

Alrededor del agotamiento indígena se asistía, a la vez, a una erosión del conjunto de la movilización social. La conflictividad desatada en torno al MIE contuvo diversas iniciativas regresivas, alteró profundamente los órdenes de poder y contribuyó a acelerar la crisis de legitimidad del sistema de partidos. Sin embargo, para el primer lustro de 2000, y salvo ciertos picos de agitación social –la caída de Gutiérrez y las protestas contra el TLC–, el espiral ascendente del conflicto comenzaba a detenerse (Gráfico 1). Ello coincidía además con el decrecimiento, desde el inicio del nuevo siglo, de las tendencias participativas y asociativas a nivel nacional y local²⁵.

Para cuando emerge AP resultaba difícil ignorar la erosión de las energías reivindicativas de la sociedad y las escasas opciones electorales de las izquierdas. Nadie pareció sorprenderse, entonces, con el triunfo del multimillonario Álvaro Noboa en el primer turno de las presidenciales. La victoria final de Correa fue, en este escenario, casi providencial y aludía más bien a la preeminencia de un voto de rechazo –lo que Rosanvallon (2007) denomina “de-selección”– a la figura del bananero.

Gráfico 1. Conflictividad sociopolítica 1982-2008



Fuente: CAAP.

Antes de ello, sin embargo, Correa procuró construir una fórmula presidencial conjunta con Pachakutik. El nuevo outsider, cuando joven, había realizado trabajo misionero (con los salesianos) en una de las parroquias indígenas más pobres del país. Conoció así de cerca las luchas campesinas y la iglesia popular, e incluso llegó a aprender kichwa: algo de lo que muy pocos intelectuales, incluso comprometidos, pueden jactarse (Ospina, 2009). Su salto a la arena política llegó de la mano de su nombramiento como Ministro de Economía en el gobierno de Alfredo Palacio. Se trataba del primer ministro del sector, en dos décadas y media, que no provenía de círculos empresariales ni estaba atado al canon fondomonetarista. Desde tales funciones reorientó los excedentes presupuestarios –provenientes de una renta petrolera creciente debido a los altos precios internacionales del crudo– hacia el gasto social, y tomó distancia de las recomendaciones de austeridad fiscal de los organismos multilaterales. Correa, y el círculo de economistas heterodoxos

cercanos a él, postulaban más bien la necesidad de una mayor presencia estatal en la economía y la urgente redistribución de la riqueza social. A pesar de su breve paso por el ministerio, tales decisiones y sus radicales proclamas anti-neoliberales le proyectaron como un promisorio liderazgo del campo progresista.

La disyuntiva de participar en las elecciones presidenciales dentro de una alianza con otras fuerzas de izquierda, como PK lo había hecho desde su origen, o de hacerlo con un candidato indígena “propio” activó una nueva pugna dentro del MIE. Con un altísimo nivel de tensión y sin llegar a unificar todas las posiciones, se impuso la segunda opción. Luego de la experiencia gubernativa, el escepticismo indígena con la reiterada presencia de figuras “externas” al movimiento desincentivaba cualquier tipo de alianza.

Cerrada esta opción, los ideólogos de AP privilegiaron antes que la construcción de un frente amplio o de una coalición de movimientos y partidos, la formación de una estructura de acumulación política *propia y diferenciada* de aquellos. Gustavo Larrea, uno de los fundadores de AP, señalaba al respecto:

Si entrábamos a esas disputas (con las organizaciones) no teníamos posibilidades de construir *fuerza política inmediata* ya que el movimiento obrero, el movimiento indígena, el afro ecuatoriano, el movimiento de mujeres, tienen liderazgos legítimos que se han ganado a lo largo de la historia y con los cuales no hay por qué disputar [...] Nuestra organización resuelve no realizar coaliciones con frentes sociales sino *trabajar territorialmente*. (Larrea, 2008: 129; énfasis del autor)

El núcleo fundador de AP estuvo compuesto por antiguos dirigentes de la izquierda tradicional, por intelectuales y activistas de la nueva izquierda social, por figuras provenientes de novísimas organizaciones ciudadanas (surgidas en abril), y por personajes sin trayectoria militante, cercanos al entorno personal del candidato presidencial. Emergía así una fuerza heteróclita amalgamada bajo el horizonte de un anti-partidismo extremo, la voluntad de superar el neoliberalismo y el peso de un liderazgo político *–marketing* mediante– sofisticadamente empaquetado. Dicho perfil y composición entrañaban no solo una ampliación del espectro de la representación social de las fuerzas de izquierda hacia lo que Quintero denomina “los sectores sociales auxiliares o las clases intermedias de la estructura global del país”²⁶, sino además una reorientación en sus lógicas de acción política y un reajuste en los equilibrios entre el liderazgo individual y las dinámicas de acción colectiva cercanas a la tendencia. El peso de estas últimas fue, desde los orígenes de AP, relativizado por los intentos de llegar al tejido micro-local de la sociedad:

[...] se resolvió promover un tipo de organización familiar [...] puesto que no se trabaja solo con los individuos. Son encuentros familiares de carácter geográfico. Esta definición generó un enorme contingente de compañeras y compañeros que en vez de dedicarse a pelear con otras fuerzas de izquierda se dedicó a construir fuerza en cada cantón, en cada parroquia, en cada barrio. (Larrea, 2008)

Desde la primera campaña, AP puso en marcha, en efecto, los denominados Comités Ciudadanos Locales o Familiares. A través de una perspectiva territorial, ello proyectaba la base del recién nacido movimiento *–más allá de cualquier constelación organizativa–* hacia el amplio espectro de ciudadanos no organizados.

La articulación con partidos y movimientos de mayor trayectoria organizativa fue siempre vista como innecesaria y potencialmente conflictiva. El acuerdo, más bien marginal, con el pequeño Partido Socialista Ecuatoriano ha sido la única salvedad. La debilidad del tejido organizativo, la desconfianza entre las fuerzas progresistas y el pragmatismo del nuevo movimiento hacían prever que, hacia futuro, se reforzaría tal lógica de construcción política.

Convergencias programáticas, tensiones productivas

La posibilidad de que llegue al poder uno de los máximos representantes de la derecha oligárquica (Noboa) acercó a múltiples organizaciones sociales y populares a la campaña de AP. La dinámica asamblearia forjada entre 2005 y 2006 también se movilizó activamente. Dicha sintonía se profundizó cuando, el día mismo de su posesión, Correa convocó a una Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria (ANC).

Sin representación en el legislativo –para afirmar su vocación anti-partidaria AP no presentó candidatos parlamentarios– y con la derecha controlando la mayoría, la convocatoria al *referéndum* que diera paso a la ANC fue objeto de una intensa pugna entre los principales poderes del Estado. Si anteriores crisis políticas se resolvieron con las destituciones presidenciales de jefes de gobierno sin sólidos bloques parlamentarios y baja credibilidad social, en el 2007 sucedía lo inverso: un presidente cuyo único capital político era el robusto apoyo popular a su figura provocaba, sin estricto apego a derecho, la destitución –por parte del Tribunal Supremo Electoral– de 57 diputados acusados de obstruir ilegalmente la convocatoria a la consulta. La “caída parlamentaria” viabilizó el proceso constituyente.

En abril de 2007, el 82% de la población aprobó la instalación de la ANC. El conjunto del campo popular y progresista sostuvo el voto afirmativo. Ya en los días de mayor conflicto entre Correa y el Parlamento, diversos sectores sociales se habían movilizado, incluso de modos violentos, contra los legisladores de oposición. El 1 de mayo de 2007, en un hecho que no tenía precedentes en el vigente ciclo democrático, Correa encabezaba una multitudinaria marcha por el día de los trabajadores. La gran mayoría de organizaciones clasistas y populares caminaba junto al presidente. El sentido de los antagonismos trazados por Correa posibilitaba dicha confluencia: además de la confrontación con los partidos, su programa gubernativo le enfrentó con la banca, los grandes medios de comunicación, los gremios empresariales, la constelación de agencias transnacionales que sostuvieron el neoliberalismo y, sobre todo, con la poderosa élite guayaquileña cercana a Jaime Nebot, tres veces electo alcalde como parte del principal partido de la derecha ecuatoriana.

Las elecciones de los constituyentes, en septiembre de 2007, favorecieron largamente al “campo del cambio”. AP obtuvo 80 curules de las 130 en disputa. El resto de las izquierdas (PK, MPD, ID) se acercó al 10%. Las alianzas entre ambos segmentos se dieron de modo marginal en pequeñas provincias. Se ratificaba así la opción de AP de privilegiar el apuntalamiento de su propia fuerza: el ciclo de éxitos electorales reforzaba dicha apuesta. Las listas del oficialismo incluyeron ya, en cualquier caso, a algunos segmentos del movimiento popular²⁷ y de las nuevas organizaciones ciudadanas portadoras de un discurso ético sobre la política: el caso emblemático ha sido el de Ruptura-25. AP adquiriría así el perfil de una coa-

lición de fracciones en que coexistían sectores de centro-derecha, vertientes del ecologismo, organizaciones de mujeres, expresiones de las iglesias progresistas (y no), militancias de izquierdas, ciudadanos inexpertos y políticos oportunistas de larga trayectoria.

Si en la Constitución de 1998 la izquierda y las organizaciones sociales alcanzaron el reconocimiento de la figura de los derechos colectivos y el fortalecimiento del espectro de los derechos sociales, en el proceso de 2007-2008 se empeñaron en sostener y ampliar dichas conquistas pero en el contexto de una disputa más global por la transformación del modelo de desarrollo. El horizonte aspiracional de la ANC combinó, en efecto, la superación del orden neoliberal y el desmonte de la dominación partidaria. Desde su origen, AP había colocado enfáticamente dichos lineamientos en el debate público. Tal entorno ideológico trazaba el terreno de la participación social.

En Montecristi²⁸ se verificó una activa e innovadora pero no tan ruidosa movilización popular. Además de la debilidad del campo organizativo, la localización de la sede de la Convención –alejada de los centros urbanos más importantes– conspiraba contra formas masivas de participación colectiva en su torno. Las organizaciones debieron modificar sus habituales tácticas de influencia: enviaron asesores permanentes, se desplazaron en los momentos decisivos, realizaron un trabajo de *lobby* con los distintos bloques. Se constituyeron entonces redes temáticas mixtas (sociedad-estado) para discutir tramos de la reforma constitucional en distintas áreas de política pública. La complejidad de las agendas propuestas y el desarrollo de específicas destrezas de negociación revelaban importantes niveles de profesionalización entre los activistas. Allí reside hoy en día, al igual que en otros países, una de las líneas de transformación del campo organizativo ecuatoriano. El rol de las ONG y la cooperación internacional ha sido clave en este aspecto. Las asociaciones consiguen desafiar así con mayor consistencia la definición “*top-down*” de las decisiones políticas: una suerte de ‘contra-experticia militante’ disputa la construcción de la agenda pública con los tradicionales decisores. Foros públicos, plantones, marchas y conciertos completaban el arco de repertorios de presión con que, desde sus particulares agendas, se posicionaban los distintos actores sociales en la Convención. Esta puso también en marcha específicos mecanismos participativos que incluían foros nacionales e itinerantes, comisiones generales y dispositivos virtuales²⁹.

La cercanía en las trayectorias militantes de múltiples asambleístas y dirigentes sociales facilitó el desarrollo de sus conexiones. La apertura del presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, a la participación de los movimientos les confería, a su vez, mayor visibilidad política. A pesar de que los episodios de tensión no fueron pocos, el proceso constituyente supuso un momento de alta fluidez en las relaciones entre los procesos sociales y las instancias de representación democrática. Así, tanto por las formas de participación como por los contenidos constitucionales, la última ANC puede ser considerada como un punto en que, desde lo social y lo político, se encontraron aquellos sectores que se consideraban excluidos de los centros de poder y que habían asumido la forma de organizaciones de carácter reivindicativo y contestatario (León, 2009).

Entre el dinamismo participativo y las presiones del Ejecutivo para que el pro-

ceso ganara en celeridad –Correa ha tendido, regularmente, a contraponer eficacia y participación–, AP decidió invitar a los assembleístas de las bancadas afines –Pachakutik, MPD, e ID– a sus deliberaciones internas. Se formó así un “mega bloque” de 90 constituyentes. Tales reuniones funcionaron como instancias de debate y decisión partidaria. En su seno se coordinaban –bajo la hegemonía de AP– las resoluciones que luego serían votadas en conjunto. Los disensos podían aparecer en esta instancia pero no debían expresarse en las sesiones plenarios. La unidad del bloque se preservaba con sigilo al costo de evitar la amplificación de ciertos debates en el pleno de la Asamblea.

La recurrencia de las fricciones al interior de AP se colaba, de todos modos, en la opinión pública. Los debates sobre la cuestión ecológica dejaron ver, más que cualquier otro tema, la intensidad de las disputas. Acosta y los assembleístas leales a Correa mantuvieron intensos duelos en relación a los límites ambientales de la explotación minera, a la declaración del agua como derecho humano fundamental y a la necesidad de consultar a las poblaciones y comunidades indígenas (tesis de Correa) u obtener su consentimiento previo (de Acosta), cuando el Estado dispusiera la explotación de recursos naturales en los territorios que ellas ocupan. La influencia moral e intelectual del presidente de la Asamblea, que contaba con el respaldo del bloque de PK, permitió que las tesis ecologistas salieran bien libradas en los dos primeros debates. Dio paso, además, a la *sui generis* consagración de los “derechos de la naturaleza”. El consentimiento previo fue, sin embargo, descartado. La dureza del debate dejó malogradas las relaciones entre las dos figuras más visibles de la Revolución Ciudadana, y entre Correa y el movimiento indígena. Las primeras deserciones en AP vendrían, sin embargo, por otras razones. Algunas de sus facciones propendían hacia una modernización de la Carta Magna en materia de sexualidad. El activo rechazo de grupos cercanos a las cúpulas eclesiásticas y al Opus Dei aupó, entonces, la renuncia de dos assembleístas que decían defender la moral católica del país. Múltiples organizaciones de mujeres condenaron la timidez con que el oficialismo encaró el tema. El caso es, sin embargo, que la influencia de estas últimas en el debate público ha sido eclipsada, durante los últimos años, por el dinamismo de sectores católicos ultra-conservadores. Ya en 2006 avanzaron campañas contra la venta de pastillas anticonceptivas de emergencia y contra la educación para la sexualidad. Luego, procuraron penalizar el aborto terapéutico. En Montecristi rechazaron incluso el uso de nociones como “identidad de género”. La visibilidad de este segmento asociativo dejaba entrever no solo la pérdida del dominio de los sectores contestatarios sobre la movilización de la sociedad civil (Ibarra, 2008), sino la fragilidad de los movimientos sociales en la disputa por la hegemonía cultural de la sociedad. Solo el dinamismo de un grupo de assembleístas mujeres (AP) identificadas con la causa y su conexión con jóvenes militantes feministas lograron contener, *in extremis*, los embates retardatarios de tal sector del asociacionismo católico.

Similares controversias y articulaciones se dieron en relación a otros tópicos. Si la promoción de la participación ciudadana o la recuperación de la regulación estatal sobre la economía generaban menos controversias, la declaración del Estado como plurinacional –demanda histórica del MIE– evidenciaba la influencia de las posturas “movimientistas” y pro-indígenas dentro de AP en medio de las

tribulaciones presidenciales y los recelos de sus allegados. De igual modo sucedió con cuestiones relativas a las demandas de los maestros y sindicatos públicos por ciertos derechos colectivos, o a la gratuidad de la educación universitaria. Los nexos del ala izquierda del bloque con las organizaciones sociales y con ciertos segmentos del ejecutivo dejaban abierta la discusión de formulaciones promisorias. Ni la propensión decisionista de las interferencias presidenciales, ni la beligerancia de ciertas relaciones desmontaron, pues, el espacio de interlocución política que había forjado la ANC. Honneth (1996) ha argumentado que los espacios públicos pueden estructurarse a través de conflictos en que actores con identidades e intereses diversos, e incluso contrapuestos, tienden a reconocerse políticamente. La convención entreveró en dicha lógica al nuevo bloque gobernante, a una gran variedad de organizaciones populares y a diversas iniciativas ciudadanas. La ampliación de los derechos, el incremento de los sujetos sociales que los portan³⁰ y de los ámbitos que atingen³¹, recogían la productividad de su presencia y de las disputas allí encaminadas. El proceso constituyente supuso el afianzamiento de las expectativas sociales de cambio y la expansión del espacio de reconocimiento político.

“Con la instalación del nuevo parlamento, por otro lado, la ‘política de puertas abiertas’ de la constituyente se revertió”

Así, aun a pesar del remezón que causó en la izquierda y en los movimientos sociales el pedido de AP para que Acosta dejara la dirección de la ANC a un mes de su terminación³², diversas organizaciones sociales, el MIE y Pachakutik optaron por respaldar el proyecto constitucional. Posicionaron, sin embargo, la tesis del “sí crítico”. Remarcaban, de este modo, sus distancias con el poder ejecutivo pero reconocían los avances del proyecto constitucional. El MPD, el socialismo y las organizaciones clasistas más tradicionales sostuvieron, llanamente, la opción afirmativa. Una reducida fracción de sindicatos públicos (petroleros), pequeños grupos de izquierda y disminuidos partidos centristas postularon la tesis de la abstención, del voto nulo o incluso del no. Su posición reflejaba la necesidad estratégica de una nítida diferenciación con respecto a Correa y un rechazo a las irregularidades procedimentales en la aprobación de la Carta Magna.

Nueva polarización

En abril del 2009 se convocó a elecciones generales en el marco de las nuevas reglas políticas delineadas por la Carta Magna. Esta dispuso, además, la elaboración inmediata de múltiples leyes fundamentales que echaran a andar los principios constitucionales. En ambos escenarios se verificaron las dificultades del gobierno para procesar las relaciones con importantes dinámicas de acción colectiva autónoma y para estabilizar un campo de alianzas con actores sociales y políticos más o menos afines.

Dichas inconsistencias pesaron en el balance electoral que algunos calificaron como una amplia victoria del movimiento gobernante. A pesar de la histórica reelección de Correa en primera vuelta y de la consolidación de AP como la más

importante fuerza política a nivel nacional y local, el oficialismo no alcanzó la mayoría parlamentaria absoluta, sus candidatos fueron derrotados para la alcaldía de Guayaquil y la Prefectura de Guayas –las grandes circunscripciones electorales del país– y estuvo lejos del 63% con el que se aprobó la Carta Magna en septiembre 2008. El 52% de respaldo a la reelección evidenciaría que la agenda de cambio no es visualizada como bandera de un solo movimiento político. El MPD y PK recuperaron, en este marco, sus cotas de representación parlamentaria y local.

Antes y después de las elecciones generales, la tensión y beligerancia entre Correa y, sobre todo, las organizaciones indígenas, se mantuvo constante. Los primeros embates se dieron, en enero de 2009, luego de que sectores indígenas y ambientalistas anunciaran su resistencia a la minería y acusaran al gobierno de neoliberal. Correa respondió violentamente. Habló de los peligros que representa el “izquierdismo, ecologismo e indigenismo infantil” para el proyecto nacional de cambio político. En adelante, la estrategia gubernamental pareció reorientar la polarización hacia la dirigencia indígena.

Con la instalación del nuevo parlamento, por otro lado, la “política de puertas abiertas” de la constituyente se revertió. La impaciencia revolucionaria de Correa y AP en Montecristi obligó a la función legislativa, electa en abril de 2009, a aprobar más de once leyes en un año. Se trataba de un claro desincentivo institucional para la deliberación pública y para la búsqueda de acuerdos sustantivos entre AP y las minorías cercanas. Por lo demás, contener los problemas de heterogeneidad, diferenciación e incluso antagonismo al interior de la renovada bancada oficialista aparecía, más bien, como la prioridad de sus coordinadores. En el nuevo bloque mayoritario se cuentan menos legisladores cercanos al campo de las organizaciones populares. La ruptura de la coalición política –desapareció el “mega-bloque”– tejida en Montecristi redujo, además, las opciones para que estas últimas puedan incidir en el debate parlamentario. Tal descomposición articuladora, que refleja e incuba recurrentes episodios de volatilidad programática, estimuló la reactivación del conflicto.

Así, además de los sectores que confrontaron al gobierno ‘por derecha’ y desde el arranque mismo del gobierno, desde 2009 se observa una serie de protestas provenientes de sectores organizados más o menos cercanos al arco progresista. En la configuración de tal escenario han pesado no solo diferendos programáticos en la orientación de las leyes, sino la baja disponibilidad del oficialismo para entablar procesos de interlocución política incluso con aquellos sectores que le han sido globalmente afines. Las diversas líneas de oposición social a los proyectos de ley y las dificultades de coordinación al interior del bloque de AP han retrasado su procesamiento³³. El ritmo de cambio político de la Revolución Ciudadana se ha desacelerado en medio de la exasperación de un presidente al que la gran industria mediática califica como todopoderoso.

El punto más alto del conflicto, luego de tres años del gobierno de AP, llegó a fines de 2009, cuando convergieron las movilizaciones indígenas en rechazo a ciertos artículos del proyecto de Ley de Aguas, las protestas del gremio docente en contra de la evaluación académica de los maestros y aquella de profesores y estudiantes universitarios en oposición al proyecto de ley que regularía la educación superior. La intensa cobertura mediática de las protestas no conseguía ocultar, sin embargo, la atomización de la acción colectiva y la des-implicación de una ciudadanía que, del

todo distante de la política, aún no retira la confianza a su nuevo presidente. Aunque tales sectores han mantenido específicas críticas al gobierno y a los proyectos de ley presentados por AP, comparten entre sí un malestar similar por la subestimación política y la ausencia de interlocución con el oficialismo. Correa parece creer que en la dinámica de redistribución material –que su gobierno presenta como uno de sus principales logros³⁴– está contenida la dimensión de reconocimiento moral y político con la que los sujetos consiguen inscribirse, de modo íntegro, en el proceso democrático de formación de la voluntad popular. El énfasis en la ampliación de los derechos sociales sin efectivo reconocimiento del valor público de las identidades políticas y de la contribución histórica de las fuerzas sociales a la producción y a la reproducción social tiende, no obstante, a restringir el margen de validez normativa de las pretensiones igualitarias de la agenda gubernativa.

El diálogo con el MIE –que desde 1990 se había “sentado” con todos los gobiernos de turno– solo fue posible, sintomáticamente, una vez que la beligerancia de la protesta, sobre todo en la Amazonía, llegara a tal nivel que hubo de registrarse la muerte de un manifestante. Ya en los diálogos, uno de los principales reclamos que la dirigencia indígena planteó al presidente fue su falta de respeto al movimiento. El nuevo canal de televisión pública trasmitió en vivo la dura crítica indígena. Por primera vez en tres años de gobierno, Correa era obligado a reconducir su estilo de gestión política, más bien decisionista, a favor de la puesta en marcha de un proceso de negociación. Para inicios de 2010, sin embargo, las conversaciones fueron interrumpidas. Para la CONAIE, el gobierno no tomó en serio el proceso ni acogió sus principales demandas. El gobierno, por su parte, ha argumentado que la dirigencia indígena se atrinchera en una agenda parcial que no toma en cuenta la globalidad del proceso político ni la orientación general de las políticas públicas.

En efecto, las élites empresario-bancarias refutan la idoneidad de la reforma tributaria, de la ilegalización de la terciarización laboral, del incremento del gasto público y de las remuneraciones, de la regulación bancaria, del arancelamiento a ciertas importaciones y de las mismas coaliciones geopolíticas del país –Correa se ha acercado al eje Brasilia-Caracas-Buenos Aires-La Paz– como medidas gubernamentales que no propician un entorno seguro para la inversión extranjera. En medio de los problemas de generación de empleo que ha enfrentado el Ecuador en 2009, en el contexto de la crisis global del capitalismo, pujan entonces por una vuelta a la agenda ortodoxa y rechazan la recuperación de las capacidades estatales para planificar, promover y regular la economía y el desarrollo nacional.

Aunque con ciertos matices, los actores movilizados tienden a reconocer los avances de esta constelación de políticas post-neoliberales. Resienten sin embargo, por un lado, del activismo gubernativo y del relativo incremento del volumen de intervenciones públicas que no requieren necesariamente de la intermediación del mundo asociativo. La voluntad gubernamental de ampliar la cobertura de las políticas públicas y de entrar en directa conexión con la sociedad desestructuran, así, las agendas políticas y organizativas de unas dinámicas de acción colectiva que, hasta hace poco, ponían por delante tácticas puramente reivindicativas en procura de algo más de protección y presencia estatal en los territorios. Por otro lado, y en el marco de las mismas tensiones abiertas por el retorno del Estado, indígenas, maestros y universitarios –entre otros– condenan una línea de reforma que apuntaría a la

descorporativización de las instituciones públicas. En su perspectiva, la autonomía de las organizaciones sociales se juega en la preservación de los espacios de representación conquistados en determinados segmentos de la administración pública. Defienden entonces la legitimidad de la presencia de intereses e identidades políticas y gremiales *dentro* del Estado. Al así hacerlo toman distancia del universalismo de la Revolución Ciudadana y de su tendencia a colocar al ciudadano abstracto y a los actores organizados en un mismo plano de reconocimiento político.

En otro andarivel, empieza a expandirse una retórica contraria a un patrón de desarrollo –aun cuando sea post-neoliberal y redistributivo– que se centra en formas convencionales de explotación de los recursos naturales. Sus planteamientos han abierto un prolífico e inédito debate entre diversas tendencias de la izquierda, gubernativa y no, sobre los modelos de desarrollo. El post-extractivismo está en el horizonte de estas tendencias. La discusión se centra en qué tipo de vías se escogen, en el presente, para viabilizar un nuevo eje de acumulación en las próximas décadas. La opción minera espanta incluso a altos funcionarios gubernamentales. Correa no parece ver más alternativas inmediatas a mano. La protesta anti-minera, fundada en dinámicas comunitarias de base campesina e indígena y articulada en redes ecologistas transnacionales, tenderá entonces a cobrar mayor ímpetu en los próximos años. Las coaliciones socio-políticas que abran la ruta del post-desarrollo están, sin embargo, muy lejos de su cabal implantación.

Así, la implicación social en el debate sobre la más ambiciosa propuesta ambiental del gobierno, la iniciativa ITT, no termina de despegar. La sociedad mira con relativa distancia las fracturas gubernamentales³⁵ provocadas por las diferentes perspectivas con que se procesa la propuesta de no explotar el campo petrolero Ispingo-Tambococha-Tiputini (ITT) a cambio del aporte financiero de la comunidad internacional por la contribución del país a la conservación de una de las reservas de biosfera más importantes del planeta (el parque nacional Yasuní)³⁶. Luego de tres años del lanzamiento de la propuesta, apenas cuatro de cada diez ciudadanos “han oído hablar” de la iniciativa³⁷. Incluso las agendas gubernativas de nítido signo progresista tienen problemas para anclarse en procesos de movilización colectiva que, desde la sociedad, puedan otorgarles mayor legitimidad y fuerza política a la hora de encarar los conflictivos procesos de negociación que deben encarar dentro y fuera de un gobierno atravesado por una marcada heterogeneidad.

Para fines de la primera década del siglo XXI, en suma, el combate a la “partidocracia” y al neoliberalismo habría dejado de funcionar como nodo articulador del campo progresista. Ciertas inconsistencias programáticas del gobierno, el unilateralismo político de su líder y el cortoplacismo de múltiples demandas gremiales lo desmigajan y confrontan entre sí. Dicha confrontación exacerba la incertidumbre estratégica en que se mueven todos los actores sociales y políticos en el proceso de transición hegemónica que vive el Ecuador. El errático comportamiento de los movimientos, de los cívicos guayaquileños y de cierta dirigencia indígena se sitúa en tal entorno de elevada incertidumbre. La incapacidad presidencial para reconocer cuánto del camino que hoy pisa fue despejado, hace poco, por diversas iniciativas colectivas democráticas no hace sino profundizar el desconcierto. Walter Benjamin creyó encontrar trazos autodestructivos en las visiones del progreso que licuaban la memoria de las víctimas de las generaciones pasadas en su pura apuesta por el futuro.

Bibliografía

- Acosta, Alberto *et al.* 2009 "Dejar el crudo en tierra o la búsqueda del paraíso perdido. Elementos para una propuesta política y económica para la Iniciativa de no explotación del crudo del ITT" en *Polis* (Santiago: Universidad Bolivariana) N° 23.
- Andrade, Pablo 2005 "¿Populismos renovados? Ecuador y Venezuela en perspectiva comparada" en Andrade, Pablo (ed.) *Constitucionalismo autoritario: los regímenes contemporáneos en la Región Andina* (Quito: UASB/CEN).
- Barrera, Augusto 2001 "Nada solo para los indios: a propósito del último levantamiento indígena" en *ICONOS* (Quito: FLACSO-Ecuador) N° 10, abril.
- Barrera, Augusto (ed.) 2004 *Entre la utopía y el desencanto. Pachakutik en el gobierno de Gutiérrez*. (Quito: Planeta)
- Bensaid, Daniel 2005 "Multitudes ventrílocuas" en *Viento Sur* (s/d) N° 79, marzo.
- Birk, N. 2009 "The Participatory Process of Ecuador's Constituent Assembly 2007/2008", tesis de maestría en la Universidad de Amsterdam.
- Bretón, Víctor 2007 "La deriva identitaria del movimiento indígena en los Andes ecuatorianos o los límites de la etnofagia", ponencia presentada en el 50° Congreso de FLACSO-Ecuador, del 29 al 31 de octubre.
- Chiriboga, Manuel 2001 "El levantamiento indígena ecuatoriano de 2001: una interpelación" en *ICONOS* (Quito: FLACSO-Ecuador) N° 10, abril.
- Dávalos, Pablo 2004 "Izquierda, utopía y movimiento indígena en el Ecuador" en Rodríguez, César *et al.* (eds.) *La nueva izquierda en América Latina* (Bogotá: Grupo Norma).
- Echeverría, Julio 2005 *El desafío constitucional: crisis institucional y proceso político* (Quito: ILDIS-Abya Yala).
- El Comercio* 2010 (Quito) 17 de abril.
- Hidalgo, Francisco; Corral, Luis y Alfaro, Eloy 2005 "El que se vayan todos y las asambleas populares en el Ecuador" en *Herramienta* (Buenos Aires) N° 29.
- Honneth, Axel 1996 "La dynamique sociale du mépris. D'ou parle une théorie critique de la société?" en Bouchindhomme, Christian y Rochlitz, Rainer (dirs.) *Habermas, la raison, la critique* (París: Cerf).
- Hoy* 2010 (Quito) 25 de marzo.
- Hurtado, Edison 2005 "Lo que pasó en CIESPAL. Apuntes etnográficos sobre el poder, los medios y los sin-sentidos de la violencia." en *ICONOS* (Quito: FLACSO-Ecuador) N° 23.
- Ibarra, Hernán 2008 "Notas sobre las clases medias ecuatorianas" en *Ecuador Debate* (Quito: Centro Andino de Acción Popular) N° 74.
- Larrea, Gustavo 2008 "Alianza País: una apuesta política novedosa" en Ramírez Gallegos, Franklin (ed.) *La innovación partidista de las izquierdas en América Latina* (Quito: ILDIS).
- León, Jorge 2009 "A nova Constituição do Equador, 2008" en Serafim, Lizandra y Moroni, José Antonio (orgs.) *Sociedade civil e novas institucionalidades democráticas na América Latina* (San Pablo: Instituto Pólis-INESC).
- Moreano, Alejandro *et al.* 1998 *La Nueva Constitución: escenarios, actores, derechos* (Quito: Centro de Investigaciones CIUDAD).
- Offe, Claus 1992 *La gestión política* (Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

- Ospina, Pablo 2005 "El abril que se llevó al Coronel que no murió en el intento" en *Ecuador Debate* (Quito: Centro Andino de Acción Popular) N° 65, agosto.
- Ospina, Pablo 2009 "Historia de un desencuentro: Rafael Correa y los movimientos sociales en el Ecuador" en Hoetmer, Raphael (coord.) *Repensar la política desde América Latina. Cultura, Estado y movimientos sociales*. (Lima: UNMSN).
- Pérez Ledesma, Manuel 1994 "Cuando lleguen los días del cólera" en *Zona Abierta* (Madrid: Fundación Pablo Iglesias) N° 69.
- Quintero, Rafael 2007 "Los socialistas de cara al próximo gobierno" en *La Tendencia* (Quito: Fundación Friedrich Ebert Stiftung) N° 4.
- Ramírez Gallegos, Franklin 2000 "Equateur: la crise de l'État et du model néolibéral de développement" en *Problèmes d'Amérique Latine* (París: La Documentation Française) N° 36, enero-marzo.
- Ramírez Gallegos, Franklin 2002 "¿Hegemonías emergentes? Golpismo, política y resignificación democrática. Un contrapunto ecuatoriano-venezolano" en *Las FFAA en la región andina: ¿actores deliberantes o subordinados?* (Lima: Comisión Andina de Juristas/Embajada de Finlandia).
- Ramírez Gallegos, Franklin 2003 "El paso del movimiento indio y Pachakutik por el poder" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año IV, N° 11.
- Ramírez Gallegos, Franklin 2005 *La insurrección de abril no fue solo una fiesta* (Quito: Taller El Colectivo/CIUDAD/Terranueva/Abya-Yala).
- Ramírez Gallegos, Franklin et al. 2006 *Participación ciudadana y reforma política. El caso del Sistema de Concertación Ciudadana* (Quito: Taller El Colectivo/PDDL-GTZ).
- Ramírez Gallegos, Franklin 2008 "Le mouvement indigène et la reconstitution de la gauche en Equateur" en Vommaro, Gabriel (ed.) *La Carte rouge d'Amérique Latine* (París: Du Croquant).
- Ramírez Gallegos, Franklin 2010 "Desencuentros, convergencias, polarización (y viceversa). El gobierno ecuatoriano y los movimientos sociales" en *Nueva Sociedad* (Quito: Fundación Friedrich Ebert Stiftung) N° 227, marzo-abril.
- Rheingold, Howard 2005 *Multitudes Inteligentes: la próxima revolución social* (Barcelona: Gedisa).
- Romero, M. 1999 "Coyuntura nacional: se profundiza la recesión y la incertidumbre" en *Ecuador Debate* (Quito: Centro Andino de Acción Popular) N° 47.
- Rosanvallon, Pierre 2007 *La Contrademocracia. La política en la era de la desconfianza*. (Buenos Aires: Manantial).
- Saint-Upéry, Marc 2001 "El movimiento indígena ecuatoriano y la política del reconocimiento" en *ICONOS* (Quito: FLACSO-Ecuador) N° 10, abril.
- Seligson, Mitchell 2008 *Cultura política de la democracia en Ecuador 2008* (Quito: Vanderbilt University/Cedatos).
- Senplades 2009 *Recuperación del Estado Nacional para alcanzar el buen vivir* (Quito).
- Silva, Erika 2005 "El coronel y los forajidos" en *Renovación* (Cuenca: s/d) N° 7, mayo.
- Tapia, Luis 2001 "Subsuelo político" en García Linera, Álvaro et al. *Pluriverso. Teoría política boliviana*. (La Paz: Muela del Diablo).

Tilly, Charles 2005 "Los movimientos sociales entran en el siglo XXI" en *Política y Sociedad* (Madrid: Universidad Complutense) Vol. 42, N° 2.

Unda, Mario 2005 "Quito en abril: los forajidos derrotan al coronel" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año VI, N° 16.

Zavaleta Mercado, René 2008 *Lo nacional-popular en Bolivia* (La Paz: Plural Editores).

Notas

1 El enjuiciamiento político en 1996 del ex presidente y empresario conservador León Febres Cordero—uno de los políticos más influyentes del país—a su ex ministro, co-ideario y para entonces vicepresidente de la República, Alberto Dahik, inició un período de intenso faccionalismo intra-elitario que impediría, por ejemplo, la privatización de las empresas telefónicas y eléctricas. Ver Diario *Hoy* 2002 "Modernización: diez años de frustraciones y pocos resultados" (Quito) suplemento *Blanco y Negro*, 1 de junio.

2 En 1994, por medio de una Consulta popular, se aprobó la posibilidad de que ciudadanos no pertenecientes a los partidos políticos (los "independientes") puedan postularse como candidatos a cualquier elección popular. PK sería uno de los primeros y más exitosos movimientos en aprovechar tal apertura institucional.

3 Se eliminó la noción de áreas estratégicas y de las formas de propiedad estatal y comunitaria y se dio paso a "una propiedad nominal sobre los recursos naturales no renovables cuya exploración y explotación racional podrán ser llevadas a cabo por empresas públicas, mixtas o privadas" (Moreano, 1998).

4 Se ampliaron los derechos y garantías ciudadanas de mujeres, niños, jóvenes, ambientalistas, consumidores, gays, personas de la tercera edad y otros grupos sociales.

5 En 1999 se cerraron 2.500 empresas que incluían sectores dinámicos como el bananero, el camarero y el pesquero. El desempleo abierto pasó así de 9.2% en marzo de 1998 a 17% en julio de 1999 (Romero, 1999).

6 La década cerraba con un promedio de la tasa de crecimiento anual *per cápita* igual a 0%, según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), en su versión 3.0.

7 Véase "Levantamiento de los Pueblos crece" en *Boletín de Prensa de la CONAIE*, 19 de enero de 2000.

8 Entre 1992 y 1996 se desarrollaron acuerdos, en los comités directivos de ciertas empresas públicas, entre sindicatos cuyos dirigentes formaban parte de la CMS, movimientos sociales y militares en contra de los proyectos de privatización. En el Ecuador los militares han sido accionistas o propietarios de algunas de tales empresas (Ramírez Gallegos, 2002).

9 Un destacado intelectual indígena planteó, sin embargo, que si bien comprendía las razones co-

yunturales de la agenda "no india", había que tener cuidado con una inflexión programática que olvide el proyecto histórico de la plurinacionalidad (Saint-Upéry, 2001: 57).

10 Se trataba del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE). Para Bretón (2008) dicho proyecto contribuyó a acelerar la fragmentación entre indígenas y campesinos. PRODEPINE—ícono de la política neoliberal de desarrollo para los pueblos indígenas—fue implementado con la participación de las élites locales y nacionales de las organizaciones étnicas. El Estado no disponía de ningún mecanismo de fiscalización sobre el proyecto.

11 El proyecto establecía el aumento de las horas de trabajo de 40 a 48, facilidades para la remoción de empleados públicos y el congelamiento de los salarios.

12 Internet y el teléfono móvil contribuyeron a la convergencia de sectores del todo dispares. Howard Rheingold (2005) analiza las movilizaciones previas a la destitución del presidente filipino J. Estrada en 2001 y acuña la expresión "multitudes inteligentes" para referirse a la centralidad de las tecnologías de la comunicación en la coordinación de las redes de acción colectiva. Charles Tilly (2005) advierte, sin embargo, contra los peligros de un determinismo tecnológico en el análisis de los cambios en los movimientos sociales.

13 Véase, por ejemplo, Julio Echeverría (2005), sobre todo el Capítulo 5.

14 En ello coinciden diversos análisis: Unda, 2005; Hurtado, 2005; Silva, 2005; Ramírez, 2005.

15 Con tal expresión Tapia (2001) hace referencia a los ámbitos políticos de baja visibilidad pública.

16 Se pueden citar como ejemplos a las asambleas de La Floresta, Parque Italia, Plaza Grande, Conocoto, entre otras. Ver al respecto Hidalgo *et al.* (2005).

17 Destacaron la Asamblea de la Salesiana, la Asamblea de Mujeres de Quito (aún vigente) y el Colectivo Democracia Ahora (donde participaron figuras de las organizaciones urbanas antes adscritas a PK).

18 Sobre las fracciones asamblearias en la violenta transmisión de mando a Palacio, véase Edison Hurtado (2005).

19 Fue vicepresidente de Gutiérrez. Una vez proclamada su destitución, se dio paso a la sucesión constitucional.

20 Se trata de proyectos vinculados al control del gasto electoral, el monitoreo de medios, observatorios de política pública, etcétera. Los directores de ONG como Participación Ciudadana, Corporación Latinoamericana de Desarrollo, entre otras, adquirieron intenso protagonismo público en aquellos días. Algunos de sus líderes, tiempo después, pasaron a la escena electoral en el marco de coaliciones con diferente signo político.

21 Según datos del informe final del SCC, el sistema recibió 230.930 “participaciones ciudadanas” y 52.415 propuestas ciudadanas entre junio y agosto de 2005. Sobre el frustrado proceso de reforma política y el funcionamiento del SCC véase Ramírez Gallegos *et al.* (2006).

22 Este segmento del texto contiene parte de los argumentos desarrollados en Ramírez Gallegos (2010).

23 Así se autodefine el gobierno de Correa.

24 Nombre del movimiento político liderado por Correa. P.A.I.S. significa Patria Altiva I Soberana.

25 En 2001, el 34% de los ecuatorianos manifestaron haber participado en “comités pro-mejoras de la comunidad”; en 2008 este indicador se ubicaba en el 26%. La tendencia se repite para otras instancias asociativas. La participación ciudadana en los gobiernos locales decayó, igualmente, del 10,8 en el 2001 al 5,7 en el 2008 (Seligson, 2008).

26 Se trata de “los sectores sociales intermedios, urbanos y rurales, los trabajadores asalariados no proletarios, la pequeña burguesía urbana y rural, intelectuales, burócratas, profesionales urbanos y rurales, pequeños y medianos comerciantes, transportistas, obreros en activo y muchos empresarios individuales –no corporativizados– con ideas nacionalistas” (Quintero, 2007: 41).

27 Dirigentes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), del Seguro Social Campesino, del Foro Urbano, ex militantes del Pachakutik, entre otros, terciaron por AP.

28 Pequeño cantón de la provincia de Manabí, al norte del litoral ecuatoriano, donde se desarrolló la Asamblea. Allí nació el general Eloy Alfaro, líder de la revolución liberal que a inicios del siglo XX consagró la separación entre la iglesia y el Estado y el

derecho a la educación laica y gratuita. Es uno de los referentes de Correa.

29 La ANC recibió alrededor de 70 mil personas entre movilizaciones y eventos. Los 23 Foros Nacionales contaron con la participación de 11.500 ciudadanos. Más de 3.100 propuestas fueron, además, enviadas por la ciudadanía (Birk, 2009).

30 Se hace referencia, entre otros, a los ecuatorianos residentes en el exterior, a las personas con discapacidad, montubios (campesinos de la Costa) y extranjeros. En una formulación post-liberal, además, la Carta Magna reconoce a individuos y colectivos (pueblos, nacionalidades, organizaciones) como sujetos de participación.

31 Los denominados “derechos del buen vivir” incluyen dimensiones ambientales, tecnológicas, comunicativas y culturales.

32 La crisis del oficialismo provenía de las diferentes posiciones en relación al fin de la Asamblea. Acosta no quería sacrificar la calidad del debate en nombre de los tiempos políticos. Planteó extender las deliberaciones. Las encuestas evidenciaban, sin embargo, un acelerado desgaste del proceso. Correa y el comando central de AP leyeron la propuesta como un suicidio político.

33 Por mandato constitucional hasta fines de 2009 debían aprobarse 16 leyes que viabilizaran el proceso de transición institucional y el cambio de régimen de desarrollo. Hasta marzo de 2010 solo habían sido aprobadas 5.

34 La reforma tributaria de carácter progresivo, el consistente aumento de la inversión en política social y el incremento de la cobertura del ingreso familiar con relación a la canasta básica aparecen como elementos nodales de la agenda redistributiva del gobierno. Véase Senplades, 2009.

35 Fander Falconí, uno de los fundadores de AP, renunció como Canciller en enero de 2010 por controversias con el presidente sobre el manejo del fideicomiso que regentaría los aportes internacionales por el ITT.

36 Los detalles de la propuesta pueden encontrarse en el trabajo de Acosta *et al.*, 2009.

37 Véase el informe mensual Perfiles de Opinión de enero de 2010.